



Maite Pagazaurtundua - European Parliament

Bât. Willy Brandt 05M055

60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Bruselas, 14 octubre 2022

Estimado comisario Reynders,

Ayer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reconoció en una entrevista a la cadena autonómica TV3 que la decisión del Gobierno español de no recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes catalanas que burlan las sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de clases en español, forman parte de un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta ahora le he escrito varias veces (véanse los correos de mayo y junio) denunciando la inacción del gobierno central frente a los ataques de la Administración autonómica al Estado de Derecho, pero ahora tenemos las pruebas de que ha habido una concertación política a favor del desacato de sentencias y contra el imperio de la ley que implica discriminación manifiesta por razones de lengua.

Es claro que la confesión en televisión del presidente de la Generalidad de Cataluña revela comportamientos contrarios a los deberes inherentes a su cargo, tanto por su parte como por parte del Gobierno de Sánchez. Su confianza, profesionalidad y responsabilidad quedan afectadas y comprometidas.

La lengua se ha convertido en Cataluña en un señuelo para discriminar por razones de pensamiento, ideología y creencias en el marco de la construcción de un régimen ultraidentitario en el que la Administración regional desoye sistemáticamente las sentencias judiciales y dicta instrucciones para hacer del catalán la única lengua de enseñanza. Y eso que solo el 31,5% de la lengua inicial es el catalán, frente al 52,7% de castellanoparlantes.

Los padres de la enseñanza pública --pues en la privada sí se imparte en español-- no pueden ni siquiera manifestar cuál es su opción lingüística y cuando solicitan bilingüismo, se les deniega, de modo que solo les queda acudir a los tribunales. Cuando éstos les dan la razón, la Administración y parte de los centros convocan concentraciones de protesta que implican sistemáticamente un señalamiento y una demonización intolerables de padres y alumnos por reclamar sus derechos.

Se viola el derecho a la igualdad de trato, al derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. Una situación cronificada después de 40 años de gobiernos independentistas que está tomando, de forma paulatina, naturaleza sistémica. Paradójicamente, los hijos de los políticos independentistas están escolarizados en escuela privada en castellano.

Las revelaciones del presidente del Gobierno catalán se refieren también a pactos entre gobierno central y autonómico sobre otras sentencias graves, por malversación de fondos, relacionadas con los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017. "El acuerdo es que se trabajarán modificaciones legislativas y se aprobarán antes de final de año. Entre ellos, la reforma de la sedición", ha manifestado Aragonés.

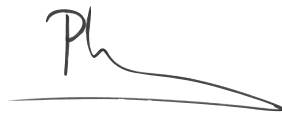
Señor comisario, en su reciente visita a España usted declaró: “Si hay una falta de implementación de una sentencia judicial y el Estado no tiene la capacidad de garantizar la implementación de esta sentencia quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de Derecho y ver qué pasa, pero de momento son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales”.

¿Va a preguntar al Gobierno de España sobre las revelaciones de Aragonés? ¿Qué medidas va a tomar a nivel europeo ante estas nuevas revelaciones? ¿No cree que ha llegado el momento de que la Comisión Europea actúe en la medida de sus posibilidades ante las constantes vulneraciones de la separación de poderes en España y politización de la aplicación de la justicia?

Según han anunciado desde la Generalitat, usted recibirá a Aragonés el próximo día 20 de octubre. ¿Piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales firmes también en el territorio catalán para así proteger los derechos de las familias que reclaman una educación en español?

Espero su respuesta,

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal line that tapers to the right.

Maite Pagazaurtundúa
Vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo